

*Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.*

México Enero 27 de 1875.

Visto el juicio de amparo promovido ante el juez 2º de Distrito de esta Capital, por el C. Pascual Carballeda contra el Ministerio de la Guerra, á virtud de reputar violadas en su persona las garantías que otorgan los arts. 16 y 27 de la Constitución, con la retención, que dicha autoridad está efectuando en propiedad del quejoso, situada en el lote núm. 1 del Ex convento de Jesus María:

Vista la sentencia del Juez de Distrito, que amparó al quejoso, y las demás constancias que obran en autos:

Considerando: que por el decreto de 6 de Mayo de 1861, el Gobierno general cedió á los bienes de beneficencia pública el convento de Jesus María, y que en consecuencia, se procedió á enagenarlo en lotes de los cuales el marcado con el núm. 1, ha pasado á ser propiedad del quejoso.

Considerando: que siendo ya de propiedad particular el mencionado lote, el Ejecutivo de la Union por su previa orden de 27 de Diciembre de 1871, declaró: que revocaba la cesion hecha á la beneficencia, de la parte del convento de Jesus María, que estaba destinada al alojamiento de la tropa, resolución en la cual se funda el Ministerio de la Guerra para justificar la ocupación del lote núm. 1.

Considerando: que si bien el Gobierno general, tiene y ha tenido facultad para ocupar el local que sirve de cuartel por causa de utilidad pública y previa indemnización no ha estado autorizado ni aún por las leyes de facultades extraordinarias para privar á los particulares de derechos legítimos y anteriormente adquiridos, declarándolos nulos y de ningún valor por disposiciones dadas con posterioridad, cual es la orden de 27 de Diciembre de 1871, y

por consiguiente con infracción del art. 14 de la ley fundamental.

Por estas consideraciones, y con fundamento de los arts. 101 y 102 de la Constitución de la República, se decretó: que se de confirmarse y se confirma la sentencia que pronunció el Juez 2º de Distrito de esta Capital, en 30 de Diciembre próximo pasado que dice:

“Que la Justicia de la Union, ampara y protege á D. Pascual Carballeda, contra el acto del Ministerio de la Guerra por el que detiene en su poder, y destinado á servicio militar el local correspondiente al lote núm. 1 del Ex-convento de Jesus María, por violarse con ello las garantías que invoca el quejoso.

Devuélvase las actuaciones al juzgado de su origen con testimonio de este fallo para los efectos consiguientes; publíquese y archívese á su vez el Toca.

Así por unanimidad de votos lo decretaron los CC. Presidente y Ministros que forman el Tribunal pleno en la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron.—José María Iglesias.—M. Auza.—Juan J. de la Garza.—José Arteaga.—Ignacio Ramírez.—Ignacio M. Altamirano.—S. Guzmán.—L. Velazquez.—M. Zavala.—José García Ramírez.—Luis María Aguilar, secretario.

Es copia que certifico. México, Febrero 9 de 1875.—Luis María Aguilar, secretario.

## AMPARO.

*Promovido ante el Juzgado 2º de Distrito de México, por los defensores de Manuel Garay, contra la sentencia del Gobernador del Distrito, que condenó á Garay á la pena de muerte.*

*Pedimento del C. Promotor fiscal.*

Enero 27 de 1875.

El Promotor fiscal dice: que el presente juicio de amparo, fué promovido por los

CC. Atilano Sanchez, Francisco T. Gordillo y Manuel de Olaguibel, como defensores de Manuel Garay, quejándose, de que á su defendido se le instruyó causa por el C. Gobernador del Distrito como reo de plagio cometido en la persona de D. Inés Salvatierra, habiéndolo sentenciado á la pena de muerte, y violando en el proceso y fallo las garantías que conceden los arts. 14, 20 y 24 de la Constitucion, y contrariando lo dispuesto por los arts. 29 y 50 de la misma Constitucion. Habiendo pedido los citados ciudadanos defensores la suspension de la ejecucion de Garay, el juzgado tuvo á bien concederla de plano, y mandó que el C. Gobernador rindiera el informe justificado que previene la ley, y fué evacuado por ese funcionario, acompañando copia de algunas constancias que obran en la causa de Garay, y son, las relativas á las declaraciones que dieron José Daza, María Antonia, José Benito Peña y Juan García, en la causa que se le instruyó como reos del mismo delito, y en las que designaron á Manuel Garay como uno de los cómplices; las declaraciones de éste y la de su mujer D<sup>a</sup> Trinidad Camacho, con copia de la sentencia pronunciada condenando á Garay á la pena de muerte. El informe funda que no han sido violadas ninguna de las garantías reclamadas, porque estaban suspensas por la ley de 2 de Mayo del año próximo pasado, puesta en vigor por la de 1<sup>o</sup> de Abril del corriente año, concluyendo con llamar la atencion del Juzgado á que, segun el art. 89 de la ley de 20 de Enero de 1869, no es admisible el recurso de amparo en negocios judiciales. Recibido el juicio á prueba, los ciudadanos defensores del quejoso, dentro del término pidieron:

1<sup>o</sup> Que por atento oficio, se pidiera al C. Gobernador del Distrito, copia certificada de las declaraciones de los testigos examinados en la causa de Garay como cómplice de Juan García y socios en el plagio del Sr. Salvatierra, menos las que ya obran en el juicio: copia de la defensa que pre-

TOMO. VII. — PARTE II.

sentaron, y de la sentencia pronunciada en ese juicio, é informe de por qué no fueron examinados en esa causa Antonio Casas, Antonio Monroy, Cristóbal Navarrete y Matilde Acosta, testigos de descargo de Garay, y por qué no se amplió la declaracion del procesado en los puntos en que pidió la defensa se ampliara.

2<sup>o</sup> Que por exhortos á Toluca y Lerma, se interrogara al C. Tañon Cañedo, á su asistente Antonio, cuyo apellido ignoraban, Tomás..... Blas Rojas, Antonio Carmona y á los demás asistentes del C. Cañedo, de cómo un mes antes de que Garay fuera reducido á prision, estaba bajo la fé del C. Cañedo, á quien voluntariamente se presentó cuando fué aprehendido, y

3<sup>o</sup> Que se llamara á la presencia judicial á María Trinidad Camacho y á Garay, para que éste declarara, como es cierto que no se amplió su declaracion, y aquella que fué obligada á declarar en contra de su marido que es el acusado. El juzgado mandó practicar todas las anteriores diligencias, segun consta del cuaderno de prueba del quejoso.

La cuestion principal en el presente juicio de amparo, es la siguiente:

¿En el proceso formado á Manuel Garay y sentencia pronunciada por el C. Gobernador del Distrito, se han violado las garantías que concede la Constitucion en sus arts. 14, 3<sup>a</sup> y 4<sup>a</sup> parte del 20, 24, 29 y 50?

La ley de 10 de Abril último, que prorogó por un año la de 2 de Mayo de 1873, es la vigente para estos casos, y el Juzgado sin meterse á la revision del proceso que no permite la última parte del artículo 5<sup>o</sup> de la citada ley de 2 de Mayo que dice:

«La sentencia se ejecutará sin admitir otro recurso que el de indulto; solo debe examinar si el C. Gobernador obró con arreglo á esa ley. Esta en su art. 1<sup>o</sup> suspende las garantías que la Constitucion concede en la primera parte del art. 13,

primera del art. 19, 20 y 21.» El art. 3º de la misma ley, dice:

«Los que no fueron aprehendidos infraganti, serán juzgados sumaria y verbalmente por las autoridades..... Dentro de dicho término se pronunciará sentencia de muerte si fuere probado el delito, etc.»

En vista de las anteriores disposiciones, de la sentencia é informe del C. Gobernador, resulta, que no ha sido violada la garantía concedida por el art. 14 de la Constitución, supuesto que tratándose de un hecho acaecido el mes de Enero del corriente año, se aplicó la ley de 2 de Mayo de 1873 anterior al hecho, no siendo exacto como asientan los ciudadanos defensores, que únicamente es aplicable á los que se aprehendan infraganti.

La 3ª y 4ª fracción del art. 20, estando suspensas todas las concedidas por ese artículo, no puede decirse que de ninguna manera han sido violadas, y como dice bien el C. Gobernador, las observaciones tocan mas á los autores de la ley que á sus ejecutores.

La del art. 24, por haberse considerado por el C. Gobernador como circunstancia agravante que el quejoso hubiera estado preso en 1869 por dos años por plagio y robo, no habiéndoselo vuelto á juzgar por este delito, y habiéndoselo impuesto la pena por el plagio del Sr. Salvatierra, es evidente que tampoco ha sido violada.

En cuanto á la observancia del art. 29, la citada ley de 2 de Mayo fué expedida por el Congreso con arreglo á dicho artículo, y en el plagio del Sr. Salvatierra, al que siguió el asesinato, es inconcuso que los que lo perpetraron se encuentran en las excepciones del art. 23 de la Constitución.

Un solo punto falta por examinar, que podrá ser favorable ó adverso al quejoso, y es, si la ley de 2 de Mayo le es exactamente aplicable; su art. 3º exige para los que no hayan sido aprehendidos infraganti, que se les pruebe el delito, y el C. Gobernador en el informe (fs. 21, cuaderno de prueba)

conviene con los defensores de Garay, que efectivamente no fueron examinados algunos testigos de descargo del procesado, y que á éste no se le pudo ampliar su declaración por lo angustiado del término del juicio. Estas confesiones de la autoridad dejan entrever, que si fué fiel observante de la ley y encerrado en la disyuntiva de imponer una pena á que consideró acreedor á Garay ó absolverlo, tuvo que optar por el camino que creyó de su deber, teniendo en cuenta lo sumario y verbal del procedimiento; pero la justicia federal cuya órbita no está tan circunscrita, que debe tener en consideración los principios generales del derecho, y que para la interpretación debe seguir la regla de lo favorable mas que lo adverso, debe concluir que en este sentido y no en el reclamado, sí existe la violación del art. 14 de la Constitución.

Por lo expuesto, el que suscribe, pide al Juzgado declare que la Justicia federal ampara y protege á Manuel Garay. México, Diciembre 19 de 1874.—*Herrera Campos.*

Es copia que certifico.—*Francisco de A. Osorio*, secretario.

#### *Sentencia del C. Juez de Distrito.*

México, Diciembre 7 de 1874.

Visto el ocurso presentado por los CC. Atilano Sanchez, Francisco T. Gordillo y Manuel de Olagüel, defensores de Manuel Garay, en que solicitan el amparo de la Justicia Federal, contra la sentencia pronunciada por el C. Gobernador del Distrito, que condenó á Manuel Garay á la pena de muerte por el delito de plagio y homicidio en la persona de D. José Inés Salvatierra, fundando el recurso en que en la sentencia, se han violado los arts. 14, 20, 24, 29 y 50 de la Constitución, violación que hacen consistir en los hechos siguientes:

1º En que no habiéndose aprehendido infraganti al delincuente, ni estando proba-

do que cometió el delito de plagio, no puede aplicársele la ley de 3 de Mayo de 1873 vigente aún, por la de 10 de Abril, del presente año.

2º Que esta ley suspende las garantías consignadas en el art. 20 solo en el primer caso, y al privarse á Garay de las pruebas y defensas, se han violado las concedidas en las fracciones 3ª y 4ª del artículo citado.

3º Porque al tomar en consideración en la sentencia el C. Gobernador, el hecho de que Garay ha sido otra vez juzgado y sentenciado por plagio y robo, esa consideración importa un nuevo juicio, con lo cual quebranta el artículo 24 de la Constitución.

4º Que no pudiendo reunirse dos ó mas poderes en una misma persona, se ha violado el artículo 50 de la Constitución, al juzgar á Garay el C. Gobernador del Distrito.

5º Que estando limitada la suspensión de garantías, á aquellas que aseguran la vida del hombre, la falta de careos y de pruebas, importa violación del artículo 29 de la Constitución.

Visto el auto de suspensión, el informe rendido por la autoridad responsable, las pruebas rendidas por los defensores, lo alegado por el C. Promotor y lo demás que se ha tenido presente y verconvino.

Considerando: primero, que la suspensión de garantías, importa en cuanto á los actos que se relacionan con las garantías suspendidas, una interrupción temporal del régimen ordinario establecido por la Constitución Federal.

Segundo: que el hecho de haber tenido presente el C. Gobernador, la circunstancia de haber sido juzgado Garay con anterioridad por el delito de plagio, no importa un juicio, ni una sentencia, sino un dato de la anterior conducta del reo, con relación al delito porque ha sido sentenciado.

Tercero. Que al desempeñar el C. Gobernador las funciones judiciales, como go-

fe político del Distrito, no puede violar la prevención contenida en el artículo 50 de la Constitución, porque en él no reside el Poder Ejecutivo de la Unión, y si ha procedido con jurisdicción, conforme á la repetida ley de 3 de Mayo, por ser el jefe político del Distrito.

Cuarto: que aunque el quejoso y los defensores alegan la inconstitucionalidad de esta ley, tal excepción no debe tenerse en cuenta, porque ella tiene todos los requisitos que expresa el artículo 29 de la Constitución Federal.

Quinto: Que no siendo, como no es exacto, que la ley de 3 de Mayo haga distinción de garantías en los casos de que los plagiarios sean aprehendidos infraganti delito ó no, pues lo que establece el artículo tercero, es la diversa forma de procedimientos en uno ó en otro caso, la suspensión de esas garantías tiene su exacta aplicación en el presente.

Sexto: que de las constancias remitidas por el C. Gobernador, por vía de informe, y de las que en el término de prueba produjo á pedimento de los defensores, aparece plenamente probado que al reo se le leyeron todas las constancias que fundan el cargo que le resulta, se practicaron careos y ratificaciones, se le proporcionaron los medios de defensa, y que tanto de esas constancias, como de las que aparecen de la prueba rendida por los defensores, en este recurso, queda probado el hecho, de que Manuel Garay ha estado en connivencia con los plagiarios, y que tuvo un participio eficaz y directo en el delito de plagio, verificado en la persona de D. José Inés Salvatierra, el día 29 de Enero del presente año, por lo cual la aplicación de la ley de 3 de Mayo, tanto en el procedimiento como en la aplicación de la pena, no importa violación del artículo 14 de la Constitución. Por tales consideraciones, y con apoyo de la ley de 20 de Enero de 1869, se declara:

1º Que la Justicia de la Unión no am-

para ni proteja á Manuel Garay, contra la sentencia de muerte que le ha impuesto el Gobernador del Distrito, por el delito de plagio.

2º Notifíquese este fallo á las partes, sáquense las copias de estilo, y remítanse los autos á la Suprema Corte de Justicia para su revision.

Lo proveyó y firmó el C. juez primero interino de Distrito, Lic. José M. Landa: doy fé.—José M. Landa.—F. de A. Osorno.

Es copia que certifico.—F. de A. Osorno.

### *Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia*

México, Enero 27 de 1875.

Visto el recurso de amparo promovido ante el Juzgado 1º de Distrito de esta Capital por los CC. Luis Atilano Sanchez, Manuel Olagnibel y Francisco T. Gordillo como defensores del reo Manuel Garay, contra los procedimientos del C. Gobernador del Distrito, que con violacion de las garantías que consignan los arts. 14, 20, 24, 29 y 50 de la Constitucion Federal, ha juzgado y sentenciado á Garay á sufrir la pena de muerte por los delitos de plagio y homicidio perpetrado en la persona de D. José Inés Salvatierra. Visto el informe de la autoridad, el parecer fiscal, el fallo del inferior con cuanto mas se tuvo presente y ver convino.

Por sus propios legales fundamentos se confirma la sentencia pronunciada por el C. Juez de Distrito en 7 de Diciembre del año pasado, que declara que la Justicia de la Union no ampara ni protege á Manuel Garay contra la sentencia de muerte que le ha impuesto el C. Gobernador del Distrito por el delito de plagio.

Devuélvanselas actuaciones al Juzgado de Distrito que las elevó á revision, acompañándole testimonio de esta sentencia para los efectos consiguientes; publíquese y archívese á su vez el Toca.

Así por mayoría de votos lo decretaron los CC. Presidente y Magistrados que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos y firmaron.—José María Iglesias.—M. Auzá.—Juan J. de la Garza.—José Arteaga.—Ignacio Ramirez.—Ignacio M. Altamirano.—S. Guzman.—L. Velazquez.—M. Zavala.—José García Ramírez.—Luis M. Aguilar, secretario.

Es copia que certifico. México, Febrero 12 de 1875.—Enrique Landa.

## AMPARO

*Promovido ante el Juzgado de Distrito de Sinaloa por el C. Vicente Ferreira en representacion de D. Fortunato de la Vega y F. de la Vega y Cº, contra el Recaudador de Contribuciones directas de Mazatlan, que se niega á recibirles en moneda de cobre el pago de lo que adeudan por contribuciones.*

*Pedimento del C. Promotor fiscal.*

C. Juez de Distrito.

El promotor fiscal dice:

El Sr. D. Vicente Ferreira, á nombre y con poder de los Sres. D. Fortunato de la Vega y Fortunato Vega y Cº, en liquidacion, se ha presentado ante vd., entablando el juicio de amparo establecido conforme á la ley de 20 de Enero de 1869, fundándolo en las fracciones 1º y 3º del art. 1º de la misma ley, por creer que en las personas de sus representados se han violado las garantías que concede el artículo 27 de la Constitucion General de la República; y á la vez se ha invadido por la Legislatura del Estado, la órbita de las atribuciones del Congreso de la Union; con la expedicion de la ley de 28 de Diciembre de 1873, en